POSIBILIDADES DE EMPLEO EN EL MARCO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: REFLEXIONES A LA LUZ DE LA LEY 7/2021, DE 20 DE MAYO, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA¹

Susana Rodríguez Escanciano
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de León

Abstract

El tránsito desde un denostado urbanismo expansivo hacia un modelo centrado en la renovación, regeneración y rehabilitación de las viviendas va a permitir, sin duda, incentivar la coyuntura económica, mejorar la calidad ambiental reduciendo las emisiones nocivas, afianzar la habitabilidad, accesibilidad, salubridad y confortabilidad de los domicilios con las consecuentes ventajas para la cohesión social, reducir el desequilibrio geográfico entre los territorios urbanos y rurales, así como generar nuevas oportunidades de ocupación en condiciones dignas dentro del denominado sector de la construcción “ecológica”. Sobre estos objetivos incide la Ley 7/2021, de 30 de mayo, de cambio climático y transición energética, que apuesta por el crecimiento del empleo de calidad anudado a la consecución de edificios más eficientes sustentados bajo la utilización de materiales reciclados, herramientas con la menor huella de carbono posible y energías renovables.

The transition from a reviled expansive urban planning towards a model centred on the renovation, regeneration and rehabilitation of housing will make it possible to stimulate the economic situation, improve environmental quality by reducing harmful emissions, improve the habitability, accessibility, healthiness and comfort of homes with the consequent advantages for social cohesion, reduce the geographical imbalance between urban and rural territories, and generate new employment opportunities in decent conditions within the so-called "green" construction sector. The Law 7/2021 of 30 May about climate change and energy transition, has a bearing on these objectives, which is committed to the growth of quality employment linked to the achievement of more efficient buildings through the use of recycled materials, tools with the smallest possible CO2 emission and renewable energies.

IUSLabor 3/2021, ISSN 1699-2938, p. 60-97
DOI. 10.31009/IUSLabor.2021.i03.03

¹ [Investigación realizada en el marco del Proyecto de Investigación LE013P20 de la Junta de Castilla y León “La prestación de servicios socio-sanitarios en el ámbito rural de Castilla y León: apostando por un bienestar integral”].

Title: Employment opportunities in the context of the rehabilitation building: considerations under law 7/2021, of 20 may, about climate change and energy transition

Palabras clave: urbanismo social, energías renovables, eco-construcción, sostenibilidad ambiental, empleo verde y de calidad.

Key words: social urbanism, clean energy, eco-building, environmental sustainability, green and quality jobs

Fecha envío: 10.6.2021 | Fecha aceptación: 28.08.2021

Sumario

1. Los peligros de la construcción expansiva
2. La apuesta por una transición justa en el sector de la construcción: nuevas perspectivas de crecimiento tras la covid-19
3. El tránsito desde la edificación invasiva al “urbanismo social”: la necesaria reestructuración productiva
 - 3.1. Precedentes normativos internos
 - 3.2. El impulso internacional y comunitario
 - 3.3. La ley española de cambio climático
4. Viabilidad empresarial y *smart cities*
5. Yacimientos de empleo
6. La importancia de la formación y el reciclaje
7. Algunas dificultades de adaptación productiva a la denominada “eco-construcción”: evitando la pérdida de puestos de trabajo
 - 7.1. La apuesta por la subrogación de la mano de obra desde la negociación colectiva
 - 7.2. Sucesión de contratistas en servicios públicos asociados a la construcción
8. Conclusión
9. Bibliografía

1. Los peligros de una construcción expansiva

Cierto es que el sector de la construcción fue durante décadas el motor de la economía y el instrumento generador básico de ocupaciones en nuestro país, llegando a representar en 2007 el 11 por 100 del PIB². A la consecución de estos logros, además de los bajos tipos de interés, el aumento de la demanda de viviendas o su utilización como inversión refugio frente a otras alternativas, contribuyó, en gran medida, la intervención de una legislación urbanística tendente en aquel momento a la expansión de la ciudad a costa de reclasificar terrenos periurbanos para su transformación y edificación hasta límites insostenibles, al calor del crecimiento económico y, en buena medida, de la liberalización del suelo³, dando lugar al desarrollo de un tipo de ciudad dispersa, muy poco funcional, con proliferación de formas de urbanización de baja densidad, generadoras de una intensa repercusión ambiental, con asentamientos residenciales económicamente muy costosos tanto para las Administraciones Públicas obligadas a la prestación de servicios debido a la desagregación de los espacios habitados, como para los propios moradores de las viviendas al estar obligados a soportar los costes ocasionados por los continuos desplazamientos que debían realizar, en muchos casos con sus propios medios de transporte, para acudir a los centros de trabajo, docentes, de comercio u ocio⁴.

No menos verdad resulta que a partir de mediados del año 2007 se inicia un acusado retroceso de la actividad del sector de la construcción en su conjunto, que se agrava en 2008 y que continúa en 2009 y sucesivos, sin que se aprecie leve repunte hasta las postrimerías de 2014. En este desplome confluyeron lógicamente múltiples factores desencadenantes de la denominada burbuja inmobiliaria, entre los que no cabe silenciar el cambio de rumbo de la legislación del suelo que pasa a corregir la precedente destrucción del suelo agrícola, forestal y del litoral, evitar la escasa cohesión territorial y social que sufren los residentes de urbanizaciones periféricas en relación con el resto de los conciudadanos⁵, sin olvidar erradicar la ineficiencia económica derivada de los altos costes energéticos, de mantenimiento de infraestructuras y de prestación de servicios públicos⁶.

² MERCADER UGUINA, Jesús Rafael, *Salario y crisis económica*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, p. 25.

³ LÓPEZ RAMÓN, Fernando, *Introducción al Derecho urbanístico*, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 30.

⁴ QUINTANA LÓPEZ, Tomás, “Hacia un modelo de urbanismo sostenible”, en AA.VV. QUINTANA LÓPEZ, Tomás, (Director): *Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, p. 17.

⁵ QUINTANA LÓPEZ, Tomás, “De la conservación de las edificaciones existentes a la regeneración de la ciudad existente. Claves de la evolución”, *Revista Urbanismo y Edificación*, nº 24, 2011, p. 49-50.

⁶ FARIÑA TOJO, José, “Ciudad sostenible, rehabilitación y regeneración urbana”, en AA.VV. *Rehabilitación y regeneración urbana en España. Situación actual y perspectivas*, Ed. J. Tejedor Bielsa, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2013, p. 20 y 21.

La variación de la hoja de ruta de la legislación urbanística hacia la descarbonización de la economía y hacia un modelo menos expansivo y más atento a la conservación y recuperación de lo construido⁷ debe aprovecharse para lograr un incremento progresivo de las tasas de empleo con los debidos estándares de calidad, pues, como es de sobra conocido, el trabajo en la construcción tradicional se desarrollaba en condiciones precarias: alta tasa de rotación, temporalidad y parcialidad, una estructura ocupacional intensiva en mano de obra manual, un nivel de formación inferior a la media del resto de la economía, unos ritmos intensos de ejecución de las obras (destajos), un encadenamiento masivo de contratas y subcontratas ante un tejido productivo altamente atomizado con participación mayoritaria de trabajadores autónomos, una escasa innovación, una baja intervención de mujeres, una elevada participación de mano de obra extranjera y unos elevados índices de siniestralidad⁸.

Se trata de promover, en definitiva, la generación de riqueza a través de la reactivación de la construcción, teniendo en cuenta los efectos positivos que el desarrollo de este sector introduce sobre el crecimiento de otros sectores y, en general, sobre la economía, en la idea de que dicha actividad, como tradicionalmente ha sido, puede seguir constituyendo en el futuro, si bien sobre otras bases muy diferentes centradas ahora en la renovación, regeneración y rehabilitación de entramados construidos, un importante dador de ocupaciones de calidad, aspecto particularmente interesante en momentos actuales donde las cotas de desempleo alcanzan valores muy altos, contribuyendo, al tiempo, a la sostenibilidad medioambiental⁹.

El Consejo Económico y Social de España¹⁰ ya señaló, en el año 2015, la necesidad de adoptar las medidas pertinentes para la reactivación del sector bajo estas nuevas coordenadas, no sólo por la importancia cuantitativa, directa e indirecta, en la economía y el empleo decente (como mero botón de muestra “*si se rehabilitasen en España 10 millones de edificios hasta 2050 se generarían hasta 130.000 puestos de trabajo directos*”)¹¹, sino porque se podrían reducir drásticamente las emisiones nocivas. Sobre esta duplicidad de objetivos, indisolublemente unidos, insiste, tal y como se verá en las

⁷ GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural”, *Revista Española de Derecho Administrativo*, n° 39, 1983, p. 589 y 590.

⁸ RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “Sostenibilidad laboral en el sector de la construcción: la estabilidad en el empleo como premisa”, *Temas Laborales*, n° 152, 2020, p. 13 y ss.

⁹ HUMERO MARTÍN, Antonio Eduardo, “La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas: norma jurídica definitoria del contenido del artículo 47 de la Constitución Española (hacia un modelo sostenible e integrador del tejido urbano)”, *Revista de la Unión Europea*, n° 30, 2014, p. 44 y ss.

¹⁰ Informe titulado “El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida”, 2015.

¹¹ CC.OO., “La sostenibilidad más allá de las palabras” (disponible en: <http://construccionyservicios.ccoo.es>).

páginas siguientes, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE), añadiendo, además, un tercer pilar cual es el incremento de la cohesión social (evitando diferencias entre los habitantes) y el equilibrio geográfico (eliminando disimilitudes entre territorios urbanos y zonas rurales)¹².

2. La apuesta por una transición justa en el sector de la construcción: nuevas perspectivas de crecimiento tras la covid-19

Como ya consta, el deterioro de los espacios edificados, sean viviendas o entramados de uso común, y los problemas de marginación y exclusión social que de ello se derivan, plantean demandas ciudadanas relevantes que exigen la intervención de los poderes públicos competentes en materia de urbanismo¹³, capaces, su vez, de ofrecer oportunidades de crecimiento y empleo, a condición de dar un giro al modelo de desarrollo tradicional observado en el sector de la construcción.

Este tránsito cobra renovado interés a raíz de la pandemia por la covid-19, que exige una mayor permanencia en los domicilios a los efectos de evitar la propagación de la infección y sus incesantes rebrotes, con dos manifestaciones principales necesitadas de atención inmediata: de un lado, corregir las frecuentes situaciones de infravivienda y hacinamiento en las que se ven inmersas muchas familias, alojadas en barrios deteriorados con moradas antiguas o inadecuadas; de otro, dar soporte a un fenómeno incipiente consistente en el traslado de la residencia habitual a municipios pequeños, que han venido estando caracterizados en los últimos años (en el marco de la gráfica expresión “España vaciada”) por una baja densidad poblacional y un acusado envejecimiento de los habitantes, fenómenos que pueden revertir siempre y cuando dichos territorios se doten de infraestructuras, medios y servicios públicos adecuados, principalmente ligados a la educación, la salud y el cuidado de larga duración de una población cada vez más envejecida, siendo necesario también que se aprovechen los recursos endógenos y las fuentes naturales de producción de energías renovables y se consolide una línea de apoyo al cooperativismo, emprendimiento y autoempleo, así como se normalice la posibilidad de trabajar a distancia con la ayuda de las nuevas tecnologías y de una óptima conectividad¹⁴.

¹² Disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-administrativa/tcm:30-506983>.

¹³ GÓMEZ-FERRER MORANT, Rafael, “Artículo 47 CE”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel (Director), *Comentarios a la Constitución Española*, BOE, Madrid, 2008, p. 1382 y ss.

¹⁴ Pese a que las estimaciones apuntaban que para el año 2050 más del 70 por 100 de la población vivirá en las ciudades, lo cierto es que esta tendencia puede verse afectada por la reciente preferencia manifestada por quienes viven en las ciudades y están siendo objeto de sucesivos confinamientos de volver al espacio rural. GÓMEZ JIMÉNEZ, María Luisa: “Sostenibilidad urbana local y ciudades saludables en transición en la

Es más, las medidas utilizadas hasta ahora para la contención del virus, principalmente el confinamiento domiciliario con salidas restringidas y la suspensión de actividades presenciales, han cambiado los usos y costumbres bajo una marcada tendencia a evitar aglomeraciones y contactos sociales. Esta “nueva normalidad” (“low touch”) implica un doble entramado de intervenciones urbanísticas: por una parte, no sólo la necesaria reordenación del viario y la distribución de espacios libres, zonas verdes y equipamientos deportivos de mayores dimensiones, sino también el acercamiento de los emplazamientos educativos y sanitarios –de todos los niveles– y centros de trabajo a las zonas residenciales, contando, para aquellos desplazamientos imprescindibles, con medios de transporte eficientes y no contaminantes, dotados, además, de mecanismos internos de purificación del aire; por otra, una novación en el concepto de vivienda y en los modelos edificatorios, que, tanto en el medio urbano como en el rural, requieren la rehabilitación y reforma integral de los domicilios existentes en aras a permitir un uso modular (doméstico, laboral y de ocio), energéticamente eficientes y convenientemente automatizados¹⁵. No sólo es necesario remodelar el parque de viviendas en las ciudades sino también en los pueblos, donde la oferta de inmuebles es amplia dado el acusado éxodo de la población experimentado hasta fechas recientes, pero las condiciones de habitabilidad son pésimas al tratarse de construcciones antiguas y muy poco cuidadas por sus propietarios¹⁶.

El marco de un nuevo ecosistema híbrido entre lo rural (paradigma de la sostenibilidad) y lo urbano (paradigma de la modernidad)¹⁷ demanda contar con domicilios remodelados, dotados de condiciones óptimas de confortabilidad y respetuosos con el medio ambiente, ubicados, al tiempo, en asentamientos avanzados pertrechados de servicios telemáticos, educativos, socio-sanitarios y de transporte colectivo. Las viviendas deben de adaptarse, por ende, en aras a conseguir los imperativos de dignidad vital y eficiencia energética, contando con una suficiente ventilación, una correcta iluminación, un adecuado confort término, unas fáciles condiciones de accesibilidad, un óptimo saneamiento y una

era covid-19: un enfoque jurídico sindémico ante el desarrollo azul”, *Revista Iberoamericana de Gobierno Local*, nº 18, 2020, p. 346 y ss.

¹⁵ AYUSO RUÍZ-TOLEDO, Mariano, “El urbanismo después de la pandemia del covid-19”, *Revista de Derecho Urbanístico y medio ambiente*, nº 337-338, 2020, p. 333 y ss.

¹⁶ Disponible en: https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/pdf.

¹⁷ MIÑARRO YANINI, Margarita, “Innovación tecnológica, organización del trabajo y sostenibilidad ambiental: ¿es el teletrabajo una forma de empleo verde?”, *Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros)*, nº 454, 2021, p. 15.

pertinente implementación de medidas de higienización respecto del tratamiento de aguas residuales¹⁸.

Este amplio desiderátum, concebido desde el paraguas de la “*proyección social del urbanismo*”¹⁹, puede conllevar no sólo unas condiciones dignas de habitabilidad sino también la creación de empleos bajo el ansiado calificativo “verde”, tanto en grandes corporaciones como, en mayor medida, en pequeñas empresas, que, en su actividad productiva y en el resultado final de infraestructuras y edificaciones ofrecidas al mercado, favorezcan los estándares de trabajo decente y de ahorro de energía, reducción de residuos y consumo menor de materias primas, mejorando la competitividad empresarial y logrando así la sostenibilidad económica por efecto de la ambiental²⁰. Se contribuye, a la postre, a lograr la ansiada “transición justa”, que pretende alcanzar los objetivos de trabajo decente, inclusión social y erradicación de la pobreza marcados por la OIT²¹, no en vano las viviendas van a asumir un cuádruple cometido: como lugar de residencia, como lugar donde se reciben los cuidados asociados a la dependencia ante una población sobre-envejecida, como lugar de ocio sobre todo en momentos de mayores exigencias de distanciamiento social por motivos sanitarios y como lugar de trabajo, tanto si este se desarrolla *on line* a través del sistema de teletrabajo cuanto si este consiste precisamente en prestar auxilios profesionales como asistente a domicilio o empleado doméstico.

3. El tránsito desde la edificación invasiva al “urbanismo social”: la necesaria reestructuración productiva

El sector de la edificación tradicional ha tenido la virtud de actualizarse y adaptarse progresivamente a la transformación operada y exigida por la legislación urbanística desde una agotada edificación expansiva e invasiva hacia una actividad empresarial más sostenible desde el punto de vista del empleo y desde la perspectiva de la calidad atmosférica y así, contando con esta experiencia, no es arriesgado aventurar que lo seguirá haciendo, sin duda, para dar respuesta a la nueva normalidad impuesta por el covid-19 y,

¹⁸ GÓMEZ JIMÉNEZ, María Luisa, “Vivienda domótica adaptada a la emergencia sanitaria: ideas preliminares, retos y propuestas normativas para la sociedad post covid-19”, *Revista de Derecho Urbanístico y medio ambiente*, núm- 337-338, p. 346.

¹⁹ ALONSO IBÁÑEZ, Rosario, “Marco jurídico para el urbanismo social y participativo”, en AA.VV.: *Libro homenaje al Prof. Balbé Prunes, El Derecho a la ciudad y el territorio*, INAP, Madrid, 2016, p. 176-187.

²⁰ OLMO GASCÓN, Ana María, “Tratamiento del empleo verde en la normativa internacional y europea (especialmente en el pilar europeo de derechos sociales): la precisa reconfiguración de sus elementos jurídico-laborales”, en AA.VV (MORA CABELLO DE ALBA, Laura y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, María Luz, Coords.): *El futuro del trabajo que queremos*, Bomarzo, Albacete, 2017, p. 54.

²¹ OIT, *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*, Ginebra, OIT, 2015, p. 6.

cómo no, a los requerimientos estructurales inherentes a las estrategias de actuación frente al cambio climático.

En el camino iniciado, cabe hacer referencia a los siguientes hitos fundamentales.

3.1. *Precedentes normativos internos*

Tomando como premisa la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local de 2011²², que asume cómo “*la batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá, en buena medida, en las ciudades; es decir, en la manera de organizar, desde hoy, la ciudad del futuro, integrada a nivel territorial, en estrecha asociación con otras ciudades y sus áreas rurales circundantes*”, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, apuesta de forma expresa por esta nueva perspectiva como postulado inspirador del título III de su articulado, el cual incorpora una serie de reformas que, desde la salvaguarda medioambiental, inciden en los ámbitos centrales del sustrato económico: la sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y la movilidad sostenible, y, especialmente relevante para el caso español, el impulso del sector de la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación como fuente generadora de ocupaciones²³.

Pieza clave en esta Ley es, pues, la recuperación del sector de la construcción mediante una serie de reformas centradas en el impulso a la regeneración y la renovación urbanas, que consigan, entre otros loables objetivos, generar puestos de trabajo en el marco del concepto más amplio de sostenibilidad. Desde esta perspectiva y más en concreto, su artículo 107, derogado posteriormente por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (LRRR), mencionaba la obligación de los poderes públicos de diseñar, de acuerdo con los principios de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional, una política inspirada en las siguientes actuaciones: a) fomento del uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre y adecuado, libre de ruidos y otras inmisiones contaminantes que excedan de los límites legalmente permitidos en cada momento y provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en

²² Aprobado por el Plenario de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible en Granada el 17 de junio de 2011.

²³ Según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente correspondiente a 2016, España ocupaba el undécimo lugar en términos de intensidad de emisiones GEI de la economía (330 gr CO₂eq/euro), y el décimo lugar respecto a las emisiones per cápita (7,37 ton CO₂/por hab), por debajo en ambos casos de la media alcanzada en la UE-28 (336 gr CO₂ eq/euro y 8,72 ton CO₂/por hab, respectivamente). CES: *Economía, Trabajo y Sociedad. Memoria sobre la situación socio económica y laboral. España 2016*, CES, Madrid, 2017, p. 54.

el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes, el consumo de agua, energía y la producción de residuos, y hagan más eficaz su gestión; b) mejora de la calidad ambiental y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos a disposición de todos los ciudadanos; c) desarrollo de unos servicios generales, incluidos los que aseguren el acceso universal a las nuevas tecnologías, más eficientes económica y ambientalmente en la disposición del agua, la energía y los residuos; d) favorecimiento, por contar con las infraestructuras, dotaciones y servicios precisos, de la localización de actividades de contenido económico generadoras de empleo estable y sostenibles medioambientalmente, especialmente las que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas tecnologías; e) garantía del acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones y los servicios y su movilidad, potenciando al efecto los medios de transporte, especialmente los de uso público, más eficientes energéticamente y menos contaminantes; f) integración en el tejido urbano de cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, contribuyendo al equilibrio de ciudades y núcleos residenciales, para lo que se favorecerá la aproximación de servicios y dotaciones a la comunidad residente, evitando desplazamientos innecesarios; y g) fomento del uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes del sector de la construcción.

Asentado el giro de modelo de urbanismo, apostando no por la construcción extendida, desenfadada y exponencial, fruto de ambiciones especulativas, sino por procesos de reconstrucción urbana hacia la regeneración de la ciudad existente en la Ley 8/2013, seguidamente el Gobierno procede a aprobar mediante el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), uno de cuyos objetivos fundamentales sigue siendo lógicamente el desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarios para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, postulado concretado en el artículo 3, referido a un nuevo urbanismo marcado por el *“uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente”*²⁴.

Contando con tales mimbres, han sido aprobados sucesivos Planes Nacionales de Vivienda, estando vigente en la actualidad el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, adaptado por la Orden

²⁴ QUINTANA LÓPEZ, Tomás, “Presentación. Hacia un urbanismo sostenible en Castilla y León. Fundamentos jurídicos para un cambio de modelo”, *Revista Jurídica de Castilla y León*, nº 39, p. 2.

TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican programas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que recoge varias líneas de financiación destinadas a: 1) Subsidiación de préstamos convenidos; 2) Ayudas al alquiler de viviendas; 3) Ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; 4) Fomento del parque de vivienda de alquiler; 5) Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas; 6) Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas; 7) Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural 8) Ayuda a los jóvenes; 9) Fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad; 10) Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual²⁵.

3.2. *El impulso internacional y comunitario*

Sobre estas consideraciones inciden, sin necesidad de retrotraer la mirada a antecedentes internacionales más remotos, las pautas vertidas desde Naciones Unidas en el Protocolo de Kioto de 1997, el Acuerdo de París de 2016, la Nueva Agenda Urbana (Habitat III)²⁶, la 24ª Conferencia de Katowice de 2018 o la 25ª Cumbre de 2019 de Madrid, que apuestan por la reducción drástica de las emisiones nocivas, entre otras acciones, a través de una remodelación de los edificios como cauce para lograr incrementar la cohesión social y territorial y, al tiempo, erradicar la exclusión de ciertos sectores de la población.

Igualmente, a nivel comunitario, la Declaración de Toledo, aprobada el 22 de junio de 2010 por los Ministros Responsables de Desarrollo Urbano de los 27 Estados miembros, hace especial hincapié en que “*la batalla principal de la sostenibilidad urbana se ha de jugar precisamente en la consecución de la máxima ecoeficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada*”, destacando el valioso papel que habrá de corresponder, en tal sentido, a la regeneración urbana integrada como yacimiento de empleo, idea reiterada en la Estrategia Europea de descarbonización²⁷, el Pacto Verde Europeo que prevé como actuación clave la “oleada de renovación” en el sector de la

²⁵ La intervención de las Comunidades Autónomas en la materia puede verse en <https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/politica-de-vivienda/enlaces-comunidades-autonomas-ceuta-y-melilla>.

²⁶ Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Quito, 17 a 20 de octubre de 2016.

²⁷ CACHÓN RODRÍGUEZ, Lorenzo, “La formación y los nuevos yacimientos de empleo en España”, *Reis*, nº 77-78, 1997, p. 121.

construcción²⁸, y la Directiva 2018/844 relativa a la eficiencia energética de los edificios²⁹, por la que se modifica la Directiva 2010/31, relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27, relativa a la eficiencia energética. Precisamente, teniendo presente que los edificios consumen el 40 por 100 de la energía y suponen el 36 por 100 de las emisiones de CO₂ de la Unión Europea, esta Directiva trata de actuar sobre el sector aquí analizado para incrementar la eficiencia energética, persiguiendo como objetivos la creación de edificios inteligentes que ayuden a mitigar la pobreza energética y, en concreto, la planificación de un parque inmobiliario de emisiones bajas o nulas en la Unión Europea en el horizonte del año 2050, mediante la aplicación de hojas de rutas nacionales para la descarbonización de los edificios utilizando fuentes de energías renovables mencionadas en la Directiva 2018/2001: eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, calor ambiente, mareomotriz, undimotriz y otros tipos de energía oceánica, hidráulica, biomasa, gases de efecto vertedero, gases de plantas de depuración y biogás³⁰.

En concreto, la Directiva 2018/844 pretende acelerar la renovación rentable de los edificios existentes, más específicamente, introduce sistemas de control y automatización como alternativa a las inspecciones físicas, fomenta el despliegue de la infraestructura para e-mobility e introduce un indicador de inteligencia para evaluar la preparación tecnológica del inmueble. Para ello, entre las modificaciones vertidas, implementa una estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de los parques de edificios de los Estados Miembros, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes del citado año 2050³¹.

²⁸ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final.

²⁹ Como antecedentes, cabe mencionar la Decisión 2010/707, de 21 de octubre, que de manera específica ordena mejorar los entornos empresariales, estimular la creación de empleo “verde” y “ayudar a las empresas a que modernicen sus bases industriales”, así como, sin ánimo exhaustivo, en la Comunicación de la Comisión de 22 de enero de 2014 bajo el encabezamiento “un marco estratégico en materia de clima y energía para el período 2020-2030”, donde la renovación de las ciudades adquiere gran protagonismo en la mejora de la calidad de vida y del empleo. ÁLVAREZ CUESTA, Henar, *Empleos verdes: una aproximación desde el Derecho del Trabajo*, Bomarzo, Albacete, 2016, p. 35 y ss.

³⁰ GARCÍA LUPIOLA, Asier, “Normativa para el desarrollo sostenible: los paquetes legislativos ‘economía circular’ y ‘energía limpia’”, *Revista General de Derecho Europeo*, nº 50, 2020, p. 302 y ss.

³¹ FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, María de los Ángeles, “La integración ambiental en la contratación pública: el certificado de eficiencia energética de los edificios”, *Revista General de Derecho Administrativo*, nº 49, 2018, p. 7.

3.3. Ley española de Cambio Climático

Anticipándose a la Ley Europea del Clima, actualmente en fase de propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad urbanística y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999, la Ley española 7/2021 recoge, como uno de sus ejes prioritarios, que: *“el objetivo de la política industrial verde consiste en desencadenar y facilitar los cambios estructurales que conllevan o requieren, tanto para responder a las condiciones o situaciones ambientales, como para desarrollar una economía verde y circular, definida la primera como una economía que mejora el bienestar humano y la equidad social, al tiempo que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica, y la circular como aquella no lineal no sólo basada en el trinomio extraer-usar-y-tirar, sino en la que desaparece el concepto de residuos y aparece el concepto de recursos, que pueden ser utilizados de nuevo por el sistema de producción”*. En concreto, *“con la finalidad de conseguir edificios más eficientes”*, apuesta por fomentar, en sintonía con la Agenda Urbana Española de 2019³², *“el uso de materiales con la menor huella de carbono posible, mejorar la accesibilidad de los edificios, incentivos para la introducción de energías renovables en la rehabilitación de viviendas, facilitando instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propiedad horizontal y sistemas de calefacción y refrigeración de cero emisiones”* (exposición de motivos y artículo 8).

Estas transformaciones conllevan ventajas relacionadas con la modernización del modelo productivo y el sistema energético, y ofrece oportunidades de empleo, de negocio y de crecimiento. Como sigue señalando la exposición de motivos de la Ley 7/2021, estas previsiones guiarán la transición de todos los sectores, pero tendrán una mayor repercusión en aquellos que hacen un uso intensivo de recursos, tal y como sucede en la construcción, que irá acompañado de la creación de nuevas ocupaciones en una cifra aproximada de conllevarán de entre 250.000 y 350.000 personas al final de 2030³³.

Bajo el paraguas de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España de 2020, señala que el efecto de la política de rehabilitación energética en edificios del sector residencial sobre el empleo es positivo, pues se crearían entre 33 mil y 88 mil nuevos puestos de trabajo entre 2021 y 2030, lo que supondría un aumento del 0,44 % sobre el empleo previsto en 2030. Tal efecto positivo en el empleo estaría generado por las inversiones movilizadas debido a la sustitución de instalaciones térmicas en la primera

³² Disponible en: <https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/urbanismo-y-sostenibilidad-urbana/agenda-urbana-espanola>.

³³ ÁLVAREZ CUESTA, Henar, “Transición justa y lucha contra el cambio climático en el Pacto Verde europeo y en el Proyecto de Ley de Cambio Climático en España”, *IUSLabor*, nº 2, 2020, p. 74 y ss.

mitad de la década y a medida que avanza el periodo, también lo hace el efecto de las inversiones en rehabilitación de la envolvente térmica³⁴.

En estas premisas redunda el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, que introduce 57 medidas transversales y sectoriales en consonancia con las políticas climáticas y energéticas definidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, entre las cuales ocupa un lugar muy destacado la eficiencia energética en el sector residencial³⁵. Igualmente cabe mencionar el Plan de contratación pública ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), que recoge un grupo de bienes prioritarios a los que aplicar criterios verdes, entre los cuales destacan la construcción y la gestión de edificios, además de la construcción y el mantenimiento de carreteras, suministro de electricidad, equipos de impresión y ordenadores, productos y servicios de limpieza, sistemas de climatización y transporte.

Asimismo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España de 2021 insiste en la política de apoyo a la renovación de los parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050, facilitando la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo con una repercusión muy positiva en el empleo.

En fin, como último hito hasta el momento, cabe hacer mención al Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, cuya finalidad es que *“la energía que estos utilicen sea cubierta mayoritariamente por energía procedente de fuentes renovables, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO₂ en el sector de la edificación”* (artículo 1.2), que va a implicar oportunidades laborales tangibles, bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia, para la prestación de servicios de alta cualificación. El Real Decreto 390/2021 aclara que podrá encargarse de confeccionar este documento quien *“esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de cualquiera de los proyectos de edificación o para la dirección de obras*

³⁴ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, “ERESEE 2020. Actualización 2020 de la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España”, 2020, p. 323 y 326 (disponible en: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/es_ltrs_2020.pdf).

³⁵ Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “El Gobierno aprueba el I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica”, 2019 (disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-i-programa-nacional-de-control-de-la-contaminacion-atmosferica/tcm:30-501967>).

*y dirección de ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética. Asimismo, se consideran competentes los técnicos que estén en posesión de alguna titulación universitaria que cuente con la habilitación para el ejercicio de las profesiones reguladas descritas en este apartado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales*³⁶. Sigue, por tanto, la interpretación amplia vertida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional³⁷ que no restringe la competencia para elaborar el certificado a los arquitectos y a los arquitectos técnicos, permitiendo a “*otros profesionales como son los ingenieros realizarlo con las debidas garantías*”³⁸, recientemente recogida por el Tribunal Supremo³⁹. Todo ello sin olvidar que también existen sistemas de certificación voluntaria que pretenden igualmente evaluar la sostenibilidad de los edificios en función de una serie de criterios ambientales, de innovación, consumo, etc., entre los que cabe mencionar los denominados LEED, BREEAM o Pasivhaus, que igualmente dan ocupación a técnicos especializados, a la par que sucede con las ecoetiquetas o sellos otorgados por organismos acreditados que garantizan que el material empleado posee un bajo impacto ambiental, pudiendo mencionar, entre otras, AENOR-Medio Ambiente, European Union Eco-label o Certificación Forestal, FSC (Forest Stewardship Council)⁴⁰.

4. Viabilidad empresarial y *smart cities*

Cuando está bien planificado, el crecimiento urbano encierra el potencial de generar ocupaciones laborales menos precarias en el marco de una actividad empresarial basada en la regeneración y rehabilitación integral, que comprende cometidos tan variados como pueden ser la conservación de los conjuntos históricos y culturales, la reparación y renovación del parque de viviendas cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, salubridad y habitabilidad, la

³⁶ El Real Decreto 390/2021 alude también a técnicos ayudantes del proceso de certificación, que, con el título de formación profesional, podrán colaborar en el proceso de certificación energética de edificios, en función de su formación y titulación, tanto para la toma de datos, el empleo de herramientas y programas informáticos reconocidos para la calificación energética, o la definición de medidas de mejora de la eficiencia energética, como para gestionar los trámites administrativos y la documentación relacionada con los procesos de inspección y certificación energética.

³⁷ SAN, Cont-Admtivo, 10 septiembre 2018 (rec. 16/2017). También SAN, Cont-Admtivo, 21 octubre 2020 (rec. 6/2018).

³⁸ MENÉNDEZ REXACH, Ángel, “El informe de evaluación de edificios en la Ley 8/2013”, *Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*, n° 179, 2014, p. 63.

³⁹ STS, Cont-Admtivo, 23 de junio 2020 (rec. 1371/2019).

⁴⁰ CC.OO, *Guía de construcción sostenible*, 2005, p. 40. También, FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, María de los Ángeles, “La integración ambiental en la contratación pública: el certificado de eficiencia energética de los edificios”, *Revista General de Derecho Administrativo*, n° 49, 2018, p. 8.

superación de la pobreza energética, el incremento en el uso de las fuentes renovables, el progreso de la calidad de vida de los ciudadanos en todos los barrios incluidos los menos favorecidos, así como la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en los entornos urbanos para conseguir la mejora del transporte, la movilidad, la seguridad ciudadana, el desarrollo del trabajo a distancia y el suministro y consumo de energía y agua⁴¹. Estos exigentes postulados se englobaban bajo el concepto de “*smart city*”⁴², en su pretensión de posibilitar la “*consecución de la calidad de vida de la ciudadanía*”⁴³, capaz de generar cuantiosos puestos de trabajo tanto en el tránsito hacia implantación, es decir, durante la fase de ejecución de las obras, como en la puesta en marcha y mantenimiento de las actividades que albergan los edificios rehabilitados.

Este nuevo enfoque del urbanismo, centrado en la regeneración, rehabilitación y renovación urbanas, va a permitir incentivar la coyuntura económica, impulsar el desarrollo del empleo decente diseñando emplazamientos cohesionados y viviendas dignas y energéticamente más eficientes, logrando, a la postre, terminar con la autocomplacencia hacia unas deficientes condiciones laborales que han acompañado tradicionalmente al sector de la edificación de tiempos pasados con el fin de crear nuevas oportunidades de empleo dentro de un sector de la construcción “ecológica”, menos manual y más avanzado desde el punto de vista técnico, incorporando materiales reciclados y menos contaminantes (bambú, paja, lana de oveja, lino, corcho, madera...), adelantados sistemas bioclimáticos y, cómo no, modernas herramientas, que permitan mejorar la salubridad futura de los edificios y de las actividades profesionales involucradas.

En concreto, teniendo en cuenta que el parque inmobiliario español consta de 25 millones de viviendas (un 90% de ellas construidas antes del último código técnico de la edificación, y un 60% antes de que existiera cualquier normativa de eficiencia energética), la Estrategia Española de Transición Justa⁴⁴ reconoce que las áreas con más probabilidades de empleo asociadas a la eficiencia energética podrían ser las actuaciones sobre la envolvente térmica de los edificios, la optimización de los procesos de

⁴¹ Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de la Población. “La situación demográfica en el mundo 2014”, Informe conciso, Naciones Unidas, Nueva York, 2014, ST/ESA/SER.A/354, p. 27.

⁴² VAN-HALEN RODRÍGUEZ, Juan, “Ciudades sostenibles: un reto inaplazable”, *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº 300, 2015, p. 24. También, SANTIAGO IGLESIAS, Diana, “Iniciativas para un futuro urbano sostenible: las Smart cities”, en AA.VV (QUINTANA LÓPEZ, Tomás, Director): *Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, p. 702.

⁴³ FORTES MARTÍN, Antonio, “La movilidad urbana sostenible como fenómeno jurídico: El derecho de la movilidad sostenible”, en AA.VV (FORTES MARTÍN, Antonio, Director): *Movilidad urbana sostenible y acción administrativa. Perspectiva social, estrategias jurídicas y políticas públicas de movilidad en el medio urbano*, Aranzadi, Pamplona, 2019, p. 63.

⁴⁴ https://www.transicionjusta.gob.es/common/Estatregia_Transicion_Justa-Def.PDF

fabricación, la recuperación, valorización y reutilización de los materiales, la implantación de fuentes renovables en los edificios, las auditorías y evaluación de la eficiencia energética, los dispositivos de monitorización y control de las instalaciones de los edificios o la edificación de nueva planta de consumo de energía casi nulo.

La buena noticia es que la apuesta por el diseño de la construcción bajo estas nuevas coordenadas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas va a resultar positiva desde dos puntos de vista: el relativo a la calidad en el empleo y el medioambiental. Atendiendo al segundo, no es ocioso recordar que a través de este nuevo modelo de urbanismo se va a redundar en la reducción de emisiones contaminantes, de gases de efecto invernadero o de producción de residuos, así como de los consumos de agua y energía, priorizando la utilización de materiales reutilizados o reciclados y de energías renovables frente a las fuentes de energía fósil⁴⁵. Por lo que hace al primero, un sector fuerte dedicado a la edificación ecológica permitirá la creación de un nutrido conjunto de puestos de trabajo de mayor calidad que los asociados a la construcción tradicional, más estables, mejor retribuidos, más cualificados y, cómo no, con menores dosis de penosidad y siniestralidad⁴⁶.

Un ejemplo de tal imbricación, a modo de mero botón de muestra, puede encontrarse en el III Acuerdo Marco del Sector del Cemento Sostenible que remarca la necesidad de proyectar unas políticas medioambientales concretas y bien definidas, con instrumentos de control y seguimiento centrados, muy significativamente en aspectos que integran el medio ambiente (externo) y el de prevención de riesgos (interno) evitando accidentes y enfermedades profesionales, dotando de más competencias a los delegados de medio ambiente y a los comités paritarios o mixtos sobre salud laboral y medio ambiente⁴⁷.

5. Yacimientos de empleo

Cierto es que existe un potencial significativo para la creación de nuevos puestos de trabajo en la producción de energía a partir de fuentes renovables, eficiencia energética, gestión de residuos y del agua, calidad del aire, restauración y preservación de la diversidad, adaptación al cambio climático y desarrollo de la infraestructura verde. Las estimaciones de la Unión Europea indican que la mejora de la prevención y gestión de

⁴⁵ QUINTANA LÓPEZ, Tomás, “Hacia un modelo de urbanismo sostenible”, en AA.VV (QUINTANA LÓPEZ, Tomás, Director): *Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, p. 17.

⁴⁶ RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “Sostenibilidad ambiental y prevención de riesgos laborales: reflexiones sobre el sector de la construcción ecológica”, *Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social*, nº 138, 2018, p. 219 y ss.

⁴⁷ CHACARTEGUI JAVEGA, Consuelo, *Negociación colectiva y sostenibilidad medioambiental. Un compromiso social y ecológico*, Bomarzo, Albacete, 2019, p. 107.

residuos en los Estados miembros podría crear más de 400.000 nuevos puestos de trabajo; la revisión de la legislación sobre esta materia más de 180.000; y el incremento del 1 por 100 en la tasa de crecimiento de la industria del agua en Europa entre 10.000 y 20.000. No menos irrefutable resulta, por lo que aquí interesa, a la luz de la LCCyTE, que la generación de riqueza y empleo a través de la tutela del medio ambiente se puede impulsar de forma muy destacada bajo los parámetros de la reactivación de la construcción ecológica⁴⁸, capaz de generar múltiples ocupaciones e impulsar el desarrollo económico, lo cual resulta de gran interés máxime si se tiene en cuenta que ciertos sectores como la hostelería y el turismo están en severa recesión.

Aun cuando esta idea no es nueva, pues como ya puso de manifiesto hace más de tres décadas el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo (conocido como Informe Delors), presentado al Consejo Europeo en 1993, entre los nuevos yacimientos de empleo, se encuentra “*la mejora de la vivienda: rehabilitación de viviendas deterioradas, mantenimiento de las viviendas*” y “*la revalorización de los espacios públicos urbanos: rehabilitación de espacios públicos y barrios, mantenimiento de espacios públicos, iniciativas económicas y comerciales en zonas antiguas de las ciudades*”, la verdad es que en el momento presente alcanza una mayor dimensión, pues, haciendo un estudio comparado, sin ninguna duda, a día de hoy, dentro del catálogo de ocupaciones con mayores posibilidades de incremento cuantitativo se encuentran las actividades relacionadas con la construcción, diseñada desde las coordenadas de la sostenibilidad social y medioambiental⁴⁹.

Por su propia naturaleza, la edificación y construcción es una actividad intensiva en recursos humanos en la que intervienen numerosos agentes, tanto en los aspectos de promoción, financiación y comercialización, como en los de producción con un parte técnica, de elaboración de proyectos y dirección facultativa y ejecutiva de la obra, controles de calidad y seguridad, y con otra de fabricación en sentido estricto, tanto de la propia obra como en el suministro de materiales y en las tareas de instalaciones y acabados. Es más, el segmento de la rehabilitación y reforma es el que mayor potencial representa para la generación de puestos de trabajo, dada la evolución demográfica en

⁴⁸ HUMERO MARTÍN, Antonio Eduardo, “La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas: norma jurídica definitoria del contenido del artículo 47 de la Constitución Española (hacia un modelo sostenible e integrador del tejido urbano)”, *Revista de la Unión Europea*, nº 30, 2014, p. 44 y ss.

⁴⁹ MARTÍN CASTRO, María Belén, “Ayer y hoy de los nuevos yacimientos de empleo: aproximación desde la UE al caso español”, *Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social*, nº 111, 2014, p. 103 y ss. Sin olvidar otros como pueden ser, entre muchos, analistas de datos, *data miners*, *data architects*, expertos en software y aplicaciones, especialistas en *networking* e inteligencia artificial, diseñadores y creadores de nueva inteligencia, robots e impresoras 3-D, expertos en negocios digitales y especialistas en *e-commerce*; ingenieros, matemáticos e informáticos. ÁLVAREZ CUESTA, Henar, *El futuro del trabajo vs el trabajo del futuro*, Colex, Madrid, 2017, p. 13 y ss.

España marcada por un importante envejecimiento de la población, y las necesidades de adaptar a las nuevas variables medioambientales, energéticas y sociales un parque de viviendas sumamente deteriorado y los equipamientos inherentes⁵⁰.

Cabe mencionar, así, en un listado que no puede ser sino abierto, posibles quehaceres empresariales relacionados con: En primer lugar, la rehabilitación de edificios existentes llevada a cabo por las Administraciones públicas, las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, las comunidades de propietarios (o agrupaciones de comunidades), las cooperativas de viviendas, los dueños de terrenos, construcciones y fincas urbanas, los titulares de derechos reales o de aprovechamiento, así como las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título, elenco de sujetos que persiguen una triple finalidad: por una parte, la conservación y la seguridad de la obra de que se trate, por otra, la mejora de la accesibilidad mediante el establecimiento de ascensores, rampas. etc., y, en fin, el enriquecimiento de la eficiencia energética. En segundo término, la nueva edificación por la iniciativa privada en sustitución de edificios demolidos en aras de mejorar tejidos residenciales, centros urbanos, barrios degradados, zonas turísticas y núcleos próximos. En tercer lugar, el fomento de un parque público de viviendas de alquiler. En cuarto lugar, la recuperación de conjuntos históricos. O, en quinto lugar, la gestión del ciclo integral del agua urbana que permita el abastecimiento, la reutilización y el saneamiento, el avance en la eficiencia energética, así como la eliminación y/o reciclado de residuos.

Y ello porque la rehabilitación no sólo consiste en actividades para la conservación de las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato de los inmuebles, la mejora de ciertos emplazamientos por motivos turísticos o culturales, o el incremento de la calidad y sostenibilidad del medio en el que se encontrasen, sino que también comprende los cometidos de urbanización y de dotaciones de infraestructuras en ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos y degradados, sin olvidar garantizar las necesarias condiciones de accesibilidad y movilidad así como de eficiencia energética, al tiempo que va a permitir impulsar actividades vinculadas, tanto industriales (minería y fabricación de estructuras de madera, de materiales plásticos, de productos cerámicos, ladrillos y tejas, de cemento, yeso y hormigón, de piedra ornamental, de madera, de elementos metálicos o de maquinaria), como comerciales (singularmente al por mayor de las actividades anteriormente señaladas), pasando por los servicios (de arquitectura, ingeniería y ensayos técnicos, de gestión de residuos y fuentes de energía, actividades inmobiliarias y, cómo no, turísticas).

La propia legislación urbanística da sobradas pistas sobre las actividades empresariales

⁵⁰ CES, *Informe 02/2016. El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida*, CES, Madrid, 2016, p. 30.

imbricadas: a) nueva urbanización, que supone el paso de un ámbito de suelo de la situación de rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística; b) la reforma o renovación de la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior; c) la dotación, considerando como tal las obras que tengan por objeto incrementar las infraestructuras públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste. Se extienden, por tanto, a actividades de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente, así como a la rehabilitación, entendiendo por tal la realización de las obras y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios, sus instalaciones y espacios comunes en aspectos relacionados con la habitabilidad, confortabilidad, ornato o eficiencia energética (artículo 7 TRLSRU).

Ahora bien, sin dejar de reconocer las generosas expectativas de creación de puestos de trabajo derivadas de la variada actividad empresarial de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, tampoco cabe silenciar la necesidad de un impulso político que se traduzca en una financiación suficiente que haga atractiva la inversión privada, dado que el beneficio, en términos de rentabilidad empresarial, es menor que el de la obra nueva al tratarse de trabajos de mayor detalle.

6. La importancia de la formación y el reciclaje

Para generar puestos de trabajo de calidad, desplazando la tradicional concepción desarrollista impulsora de un crecimiento urbano ilimitado fundado en una senda de despilfarro territorial⁵¹ por otra distinta que lo controle de acuerdo con el principio del desarrollo sostenible, poniendo el acento en la regeneración de la ciudad o pueblo existente, con espacios públicos y dotaciones de servicios de calidad y unas condiciones ambientales que hagan espacios para vivir más y mejor⁵², en los que pueda desarrollarse el principio de libertad de empresa en condiciones que garanticen la competencia leal entre distintos operadores económicos dentro de un sector de la construcción menos manual y más industrial, donde la innovación ocupe un lugar preferente, es necesario contar con plantillas cualificadas.

⁵¹ VINUESA ANGULO, Julio y PORRAS ALFARO, David, “La dimensión territorial de la crisis de la vivienda y el despilfarro inmobiliario residencial”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, n° 35, 2017, p. 105.

⁵² MENÉNDEZ REXACH, Ángel, “Los objetivos económicos de la regulación del suelo (1956-2015)”, *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, n° 311, 2017, p. 293.

Solo así se podrá garantizar la viabilidad de las inversiones asegurando la utilización de mecanismos como el “big data”, para poder determinar la elasticidad de la demanda y las reacciones de los potenciales clientes de viviendas; la “geolocalización”, a través de dispositivos móviles para avisar con alertas a los consumidores al pasar por viviendas de alquiler o venta; la “building information modeling” (BIM), que engloba los proyectos constructivos en un modelo 3 D, que abarca geometría y características técnicas de los elementos individuales, estructura, cerramientos o instalaciones; la “realidad virtual” para acercar al comprador a su futura vivienda; o, por no seguir, la “interconectividad”, que ofrece cualquier dispositivo con internet como mando a distancia de termostatos, ventanas, persianas, puertas, etc.⁵³. La demanda de técnicos especializados como los coordinadores de seguridad y salud⁵⁴, los directores facultativos⁵⁵, los proyectistas⁵⁶, los evaluadores de edificios o los “project manager”⁵⁷ es, pues, creciente.

Los negociadores del VI Convenio Colectivo General para el Sector de la Construcción (CCSC)⁵⁸ son conscientes de la necesidad de diseñar nuevos y mayores requerimientos en formación de los trabajadores y, en general, en cualificaciones y competencias profesionales con el fin de crear puestos de trabajo de calidad en el sector. Así, entienden procedente, de un lado, potenciar un mayor acceso de los trabajadores a las cualificaciones profesionales de los niveles 1, 2 y 3 en aquellas familias con proyección en la construcción (edificación y obra civil, madera, mueble y corcho, vidrio y cerámica,

⁵³ SÁNCHEZ, Vicente, “Las implicaciones de la economía digital en el sector de la construcción”, *Gaceta Sindical*, nº 27, 2016, p. 305.

⁵⁴ Regulados en el Real Decreto 1627/2007, que distingue, a su vez, dos tipos: el que desarrolla sus funciones durante la confección del proyecto, de obligada existencia cuando en dicha elaboración intervienen varios proyectistas, y el que lo hace durante la ejecución de la obra, de presencia necesaria cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos (artículos 2 y 3). LUJÁN ALCARAZ, José, “La seguridad y salud laboral en las obras de construcción”, *Aranzadi Social*, nº 5, 2007, p. 839 y ss.

⁵⁵ La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Edificación aclara que, a su vez, pueden ser de dos tipos: director de la obra y director de la ejecución de la obra (artículos. 12 y 13). PARAMIO PARAMIO, Alberto, *Problemática de la subcontratación en la construcción. Análisis jurídico y resoluciones prácticas*, Lex Nova, Valladolid, 2009, p. 135 y ss.

⁵⁶ Definido en el artículo 2.1 d) Real Decreto 1627/2007 como el “autor, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de obra” cuando fuera necesario. LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, María Piedad, “El Real Decreto 1627/1997 sobre medidas de seguridad y salud en las obras de construcción”, *Información Laboral*, nº 3, 2002, p. 23 y ss.

⁵⁷ Profesional de la arquitectura o ingeniería al que contrata la propiedad, el promotor o comitente de una obra, con la finalidad de que le asesore y le represente en todas las fases de la construcción y de que actúe como interlocutor de la propiedad frente a los demás profesionales o entidades que intervienen en la misma. BARREDA, Esteban, “Algunas aclaraciones sobre la responsabilidad legal del Project Manager en la construcción”, *Diario La Ley*, nº 9322, 2018, p. 1 y ss.

⁵⁸ BOE nº 232, 26/09/2017.

electricidad y electrónica, energía y agua, instalación y mantenimiento...)⁵⁹, o, por lo menos, a los programas de cualificación profesional inicial especialmente referidos a ayudante de albañilería o auxiliar en operaciones de acabado y pintura; y, de otro, actualizar el sistema de clasificación profesional, tal y como efectivamente lleva a cabo el anexo X CCSC, estructurado en tres áreas funcionales: 1) Gestión técnica, diseño y planificación, que comprende, a modo de ejemplo, las actividades de “*gestión técnica, trabajo de campo, diseño, representación gráfica; mediciones; valoraciones, investigación, etc.*”. 2) Producción y actividades asimiladas, que incluye, entre otras, las tareas de “*acondicionamiento del terreno; preparación y organización de tajos; mediciones en obra; ejecución de las distintas fases y unidades de obras de rehabilitación, edificación, civiles y marítimas (excavaciones, dragados, estructuras, cerramientos, particiones, cubiertas, aislamientos e impermeabilizaciones, instalaciones, pinturas, acabados); operaciones con maquinaria y equipos de trabajo, así como conservación y explotación de carreteras*”. 3) Servicios transversales a las dos áreas citadas anteriormente, entre las que cabe citar “*administración, finanzas, comercial, marketing, calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, limpieza, seguridad, jardinería, etc.*”⁶⁰.

⁵⁹ De particular interés son el Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios; Título de Técnico en Construcción; Título de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación; Título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación; Título de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil; Título de Técnico Superior en Centrales Eléctricas; Título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar ó Título de Técnico Superior en Energías Renovables.

⁶⁰ “Grupo 1: Peón ordinario. Nivel XII. Aprendices. Niveles XII, XIII y XIV. Personal servicio limpieza. Nivel XII. Botones. Nivel XIII y XIV. Pinches. Nivel XIII y XIV. Ordenanza. Nivel X. Porteros. Nivel X. Grupo 2: Calcador. Nivel IX. Aspirante. Nivel XIII. Ayudante de oficio. Nivel X. Peón especializado. Nivel XI. Ayudante de práctico en topografía. Nivel IX. Especialistas de 2.ª Nivel XI. Ayudante de oficio (varios). Nivel IX. Adoquinadores y emparedadores. Nivel X. Ayudante de maquinista. Nivel IX. Marinero motorista. Nivel IX. Conserje. Nivel IX. Vigilante de obra, taller o fábrica. Nivel X. Vendedor. Nivel IX. Almacenero. Nivel X. Dependientes de economatos (según ordenanza se registrarán por las normas del personal de comercio de la construcción, vidrio y cerámica (mayoritario). No tiene adjudicado nivel. Aspirante (de laboratorio). Nivel XIII. Grupo 3: Auxiliar de organización. Nivel IX. Oficial de 2.ª de oficio. Nivel IX. Especialistas de 1.ª Nivel X. Maquinista de segunda. Nivel VIII. Oficial de 2.ª (varios). Nivel IX. Ayudante entibador. Nivel VIII. Auxiliar administrativo. Nivel IX. Auxiliar de laboratorio. Nivel X. Viajantes. Nivel VII. Corredor de plaza. Nivel VIII. Cobrador. Nivel X. Grupo 4: Delineante de 1.ª Nivel VI. Delineante de 2.ª Nivel VII. Técnico de organización de 1.ª Nivel VI. Técnico de organización de 2.ª Nivel VII. Inspector de control, señalización y servicios. Nivel VIII. Oficial de 1.ª de oficio. Nivel VIII. Capataz. Nivel VII. Práctico en topografía de 2.ª Nivel VII. Especialista de oficio. Nivel VII. Modelista. Nivel VII. Encargado de obra (en general y de obra pública). Nivel VI. Patrón dragador. Nivel VI. Patrón de puerto. Nivel VII. Maquinista de primera. Nivel VII. Capataz de maniobra. Nivel VII. Capataz asentador de vías. Nivel VII. Maquinistas de primera de locomotora. Nivel VIII. Cantero de primera. Nivel VIII. Barrenero-picador. Nivel VIII. Oficial de 1.ª (varios) Nivel VII. Adornista. Nivel VII. Entibador. Nivel VII. Especialistas barreneros. Nivel VII. Buzo. Nivel VII. Contramaestre. Nivel VII. Oficial administrativo de 1.ª Nivel VI. Oficial administrativo de 2.ª Nivel VIII. Analista de segunda. Nivel VIII. Encargado de sección Laboratorio). Nivel IV. Jefe de almacén. Nivel IX. Grupo 5: Delineante superior. Nivel V. Jefe de sección

En esta nueva ordenación convencional, se definen las características comunes, el adiestramiento necesario en cada uno de los grupos quedando únicamente exento de tal requisito el primero, así como las tareas a desarrollar, teniendo en cuenta las necesidades actuales del trabajo en el sector, que demanda profesionales capacitados en el conocimiento de nuevos materiales utilizados para la mejora de la eficiencia energética, en materia de calidad y control de ejecución de obra, en nuevas tecnologías (instalaciones, climatización, ventilación, iluminación, aislamiento o energías renovables), en seguridad, habitabilidad y medio ambiente, en gestión de consumos y uso eficiente del agua, en auditoría energética, en valorización de residuos, demolición (RCDs), análisis del ciclo de vida (ACV) y en asesoramiento especializado.

Se trata de dotar a los asalariados de una cualificación que les permita ser versátiles en cuanto a los puestos de trabajo a desempeñar, con un nivel de adaptación a los cambios en sus quehaceres que impida que, ante innovaciones hacia construcciones más sostenibles, ecológicas y de una mayor complejidad técnica, el trabajador deba ser sustituido por otro más cualificado perdiendo de este modo su forma de sustento si no fuera capaz de reciclarse, idea que se plasma también en el VI CCSC, que regula, incluso, una Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional (artículo 112). También resulta interesante destacar que alude a la importancia de que la formación en temas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas se vaya incorporando progresivamente a la formación universitaria.

Singular importancia confiere la negociación colectiva, a la postre, al contrato para la formación y el aprendizaje, concebido en el ordenamiento español como uno de los mecanismos legislativos destinados a favorecer la inserción y promoción en el mercado de trabajo de los jóvenes, permitiendo obtener *“una cualificación profesional en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo”* (artículo 11.2 ET). Desde tales perspectivas, la celebración de esta

de organización de 1.^a Nivel III. Jefe de sección de organización de 2.^a Nivel V. Escultor de piedra y mármol. Nivel VI. Práctico en topografía de 1.^a Nivel VI. Ayudante de obra. Nivel IV. Jefe o encargado de sección o taller. Nivel VI. Encargado general de obra. Nivel V. Maestros industriales. Nivel IV. Grupo 6: Titulados medios / Diplomados. Nivel III. Arquitectos e Ingenieros técnicos. Nivel III. Técnicos titulados de topografía y dibujo. Nivel III. Profesores mercantiles. Nivel III. Encargado general. Nivel IV. Jefe de fabricación o encargado general de fábrica. Nivel IV. Jefe de personal. Nivel IV. Jefe administrativo de 1.^a Nivel III. Ayudantes técnicos sanitarios / Diplomado Universitario en Enfermería. Nivel IV. Encargado de sección de laboratorio. Nivel VI. Graduados sociales. Nivel III. Maestros de primera enseñanza. Nivel IV. Grupo 7: Titulados superiores. Nivel II. Arquitectos superiores. Nivel II. Ingenieros superiores. Nivel II. Actuarios de seguros. Nivel II. Licenciados. Nivel II. Intendentes mercantiles. Nivel II. Doctores. Nivel II. Grupo 8: Personal directivo. Nivel I. Directores generales. Director. Gerentes de empresa. Subdirector general. Inspector general. Secretario general” (Anexo XI).

modalidad contractual implica la combinación de dos elementos: uno clásico en la relación laboral, una prestación de servicios a cambio de una retribución; otro, más ligado a instituciones educativas, cual es la enseñanza y adquisición de conocimientos teóricos y prácticos. En esta última variante radica la peculiaridad de la relación, de manera que los contenidos de aprendizaje se convierten en una de las “obligaciones sustantivas más relevantes” de la presente modalidad, asumiendo el empresario la obligación de proporcionar al empleado tanto el trabajo efectivo debidamente tutorizado como la formación adecuada al objeto del contrato⁶¹. Además de innecesarias repeticiones del régimen jurídico legal aplicable a esta modalidad contractual, el artículo 25.4 CCSC establece una serie de disposiciones de interés:

- e) *“No podrán ser contratados bajo esta modalidad por razón de edad, los menores de dieciocho años para los oficios de vigilante, pocero y entibador, ni para aquellas tareas o puestos de trabajo que expresamente hayan sido declarados como especialmente tóxicos, penosos, peligrosos e insalubres.”*
- h) *“La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar relacionada con las actividades formativas, que deberán comenzar en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato. Además el tipo de trabajo que debe prestar el trabajador en formación estará directamente relacionado con las tareas propias del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto del vínculo. Entre estas tareas se incluyen las labores de limpieza y mantenimiento de los utensilios y herramientas empleados en la labor ordinaria.”*
- i) *“La retribución se ajustará a los siguientes porcentajes, aplicables al salario del Nivel IX y referidos a una jornada del 100 por 100 de trabajo efectivo. Así, colectivos de la letra c) y e) (entre 16 y 25 años o mayores de 18 años en supuestos de especial peligrosidad): 1º año 60 por 100, 2º año 70 por 100 y 3º año 85 por 100. Colectivos de las letras d) (escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo u otros similares, además de discapacitados): 1º año 95 por 100 y 2º año 100 por 100. Todos ellos tendrían derecho a los pluses extrasalariales.”*
- l) *“(…) La Fundación Laboral de la Construcción a través de sus centros propios o colaboradores, dará, en su caso, la cualificación y calificación a través de las pruebas correspondientes, previamente homologadas, tanto del aprovechamiento teórico como práctico y decidirá su pase a la categoría de oficial a la luz de los itinerarios formativos existentes para el sector, máxime cuando en el propio VI CCSC se recoge una apuesta por acciones, cursos o programas que impulsen, desarrollen, adapten y completen las cualificaciones profesionales de los trabajadores del sector. En la actualidad, la Fundación está acreditada para*

⁶¹ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Roberto, “El contenido de las enseñanzas profesionales en el contrato para la formación”, *Revista de Derecho Social*, nº 45, 2009, p. 147.

impartir la formación correspondiente a 128 certificados de profesionalidad, cubriendo un total de 13 familias profesionales (sobre un total de alrededor de 600 certificados pertenecientes a 26 familias)."

- m) *"El trabajador contratado para la formación tendrá derecho a una indemnización por cese del 4,5 por 100 calculado sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio devengados durante la vigencia del contrato."*

7. Algunas dificultades de adaptación productiva a la denominada "eco-construcción": evitando la pérdida de puestos de trabajo

La renovación del sector de la construcción hacia un "modelo verde"⁶² también presenta un lado oscuro, pues algunas corporaciones (principalmente de escasas dimensiones) se ven abocadas a la desaparición ante la imposibilidad económica de implementar los cambios organizativos y las innovaciones tecnológicas exigidas con el incremento del desempleo subsiguiente. De ahí el interés de contar con mecanismos de subrogación en aras al mantenimiento de la ocupación. Es más, no procede olvidar la doble funcionalidad de este instrumento: de un lado, tutiva de los intereses de los trabajadores en el mantenimiento de sus condiciones laborales; y, de otro, lucrativa desde el punto de vista mercantil, pues, además de reducir los costes que tendría que asumir el empleador que enajena la empresa, liberado del pago de las indemnizaciones inherentes a las rescisiones contractuales que en otro caso debería afrontar ante la necesidad de amortizar puestos de trabajo por haberse desprendido de parte o de la totalidad de la actividad, también va a abaratar las cargas del adquirente en la transacción, excusado de tener que invertir en procesos de selección de mano de obra, formación, integración de equipos, etc. Se producen, a la postre, sinergias entre empresas que redundan en una mejor asignación de recursos y factores de producción.

La preocupación convencional por esta cuestión adquiere un protagonismo capital para aquellos supuestos en los que no se cumplen las exigencias del artículo 44 ET⁶³, esto es, *"la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica,*

⁶² SÁNCHEZ, Vicente, "Las implicaciones de la economía digital en el sector de la construcción", *Gaceta Sindical*, nº 27, 2016, p. 305; VINUESA ANGULO, Julio y PORRAS ALFARO, David, "La dimensión territorial de la crisis de la vivienda y el despilfarro inmobiliario residencial", *Cuadernos de Relaciones Laborales*, nº 35, 2017, p. 105 o MENÉNDEZ REXACH, Ángel, "Los objetivos económicos de la regulación del suelo (1956-2015)", *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº 311, 2017, p. 293.

⁶³ GARATE CASTRO, Javier, "Descentralización productiva por medio de contratos de obras y servicios. Algunas cuestiones laborales y de Seguridad Social, con especial referencia a las Administraciones públicas", *Actualidad Laboral*, 2004, Tomo I, p. 1053.

esencial o accesorio”⁶⁴ y, por tanto, la sucesión no operaría *ex lege*. Ahora bien, las mejoras convencionales en materia de sucesión empresarial son escasas, pues se centran en un ámbito muy particular, cual es de la construcción en el sector público.

7.1. *La apuesta por la subrogación de mano de obra desde la negociación colectiva*

Teniendo en cuenta el principio de complementariedad, aun cuando no se cumplan las exigencias del precepto estatutario mencionado, la subrogación también puede derivar, como mejora en el tenor legal, de lo previsto en el convenio colectivo aplicable, tal y como sucede con el artículo 27 CCSC⁶⁵ en relación con servicios públicos relativos al mantenimiento de carreteras o vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado.

El presente CCSC otorga prioridad o preferencia aplicativa frente al posible convenio de empresa que, estableciendo condiciones inferiores, pudiese venir rigiendo las relaciones laborales en la nueva empresa adjudicataria (artículo 12), en lo que se refiere a la obligación de subrogación empresarial en las circunstancias específicas mencionadas. Así pues, en todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o cesión de una contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trata, los trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata pasarán a adscribirse a la nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad objeto de la contrata, respetando esta los derechos y obligaciones que disfruten en el último contrato en la empresa sustituida.

Será requisito necesario para tal subrogación que los trabajadores lleven prestando sus servicios en la contrata que cambia de titular, al menos cuatro meses antes de la fecha de finalización efectiva de la misma, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses, hubieran trabajado en otra contrata. El personal o trabajadores que no reúnan estos requisitos y condiciones no tendrán derecho a ser subrogados. También se producirá la mencionada subrogación del personal en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento de la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de cuatro meses en la misma y se encuentren en situación de suspensión de su contrato de trabajo por alguna de las causas establecidas en el artículo 45 del ET. b) Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a

⁶⁴ ÁLVAREZ ALCOLEA, Manuel, "Responsabilidad en los supuestos de cambio en la titularidad de la empresa. En particular, en la sucesión de contratas", en RIVERO LAMAS, Juan (Director): *Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El outsourcing*, Aranzadi, Pamplona, 2003, p. 270.

⁶⁵ BOE nº 232, 26/09/2017.

alguno de los trabajadores mencionados en el apartado anterior, con independencia de su antigüedad y mientras dure su contrato. c) Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata como consecuencia de una ampliación que perdure en la siguiente contrata, aunque no lleven los cuatro meses de antigüedad. d) Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, de forma parcial o total, dentro de los últimos cuatro meses anteriores a la finalización efectiva de la contrata (artículo 27.3 CCSC).

No desaparece el carácter vinculante de la subrogación prevista en este artículo en el caso de que el organismo público que adjudica la contrata suspendiese la actividad objeto de la misma por un período no superior a doce meses (artículo 27.9 CCSC).

A tenor del CCSC, los derechos y obligaciones sobre los que opera la subrogación quedarán limitados exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por el trabajador con la empresa saliente de la contrata, sin que la empresa entrante se encuentre vinculada por cualquier contrato o pacto anterior a aquel, particularmente a efectos de años de servicio, indemnizaciones por despido y cualesquiera otros conceptos que tomen en consideración el tiempo de prestación de servicios, a menos que ya tuviera reconocido el trabajador tales derechos mediante sentencia judicial firme con anterioridad a producirse la subrogación y le hubieran sido comunicados a la empresa⁶⁶. Quedan desprotegidos, por tanto, los encadenamientos de contratos derivados de la frecuente utilización del mal denominado “contrato fijo de obra”⁶⁷, definido en el artículo 24 CCSC, como aquel que permite el reclutamiento temporal de personal para prestar servicios “*a una misma empresa, y en distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un período máximo de tres años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última obra se prolonguen más allá de dicho término*”⁶⁸. Es más, a la luz de este precepto “*no se producirá sucesión de contratos por la concertación de diversos contratos fijos de obra para diferentes puestos de trabajo en el sector*”, al tiempo que “*la contratación, con o sin solución de continuidad, para diferente puesto de trabajo*

⁶⁶ Tenor admitido por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021 (C-550/19), siempre y cuando esta limitación no tenga como efecto colocar al trabajador en una posición menos favorable por el mero hecho de la subrogación.

⁶⁷ LAFUENTE PASTOR, Vicente Pedro, “El contrato de obra o servicio en la construcción en el nuevo escenario de la Ley 32/2006”, en AA.VV (GARCÍA BLASCO, Juan, Director): *La subcontratación en el sector de la construcción. Análisis de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y del RD 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla*, 2ª edición, Aranzadi-Thomson Reuters, Pamplona, 2009, p. 147 y ss.

⁶⁸ RODRIGO SANBARTOLOMÉ, Francisco Agustín, “El contrato fijo de obra. El artículo 15.5 del ET y las reformas laborales”, *Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros)*, nº 382, 2015, p. 109 o RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana: “Sostenibilidad laboral en el sector de la construcción: la estabilidad en el empleo como premisa”, *Temas Laborales*, nº 152, 2020, p. 13 y ss.

mediante dos o más contratos fijos de obra con la misma empresa o grupo de empresas en el período y durante el plazo establecido en el artículo 15.5 ET (24 meses en un período de 30), no comportará la adquisición de la condición establecida en dicho precepto”⁶⁹.

Importancia sustancial va a tener la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo vertida en sentencias de 29 de diciembre de 2020⁷⁰ y de 2 de febrero de 2021⁷¹, al señalar, modificando su doctrina, que no es posible concertar contratos de obra o servicio determinado para cubrir las actividades desarrolladas por una empresa en ejecución de una contrata cuando se trate de la actividad ordinaria. Asimismo, cabe mencionar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021⁷², en virtud de la cual el artículo 24 CCSC, con arreglo al cual cada contratación individual limita, en principio, la adscripción del trabajador de que se trate a una sola obra, pero, en realidad, permite renovar los contratos "fijos de obra" indefinidamente por el efecto acumulado de esos sucesivos vínculos o la agregación de estos, pone de manifiesto que dicho trabajador en realidad desempeña de modo permanente y estable tareas que forman parte de la actividad ordinaria de la entidad o de la empresa que lo emplea, de manera que la limitación a tres años consecutivos de los contratos "fijos de obra" no es una medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar, los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada.

7.2. Sucesión de contratistas en servicios públicos asociados a la construcción

Teniendo en cuenta que el artículo 27 CCSC regula la sucesión de contratista en servicios públicos, deviene necesario acudir a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que incorpora algunas previsiones legales que tratan de proteger el régimen laboral de los trabajadores afectados, especialmente la estabilidad en el empleo, a saber:

1. El artículo 130.1 LCSP prevé la obligación de subrogación cuando esta derive “de una norma legal” (esto es, porque concurren los requisitos del artículo 44 ET que requiere que lo transmitido sea susceptible de explotación económica independiente, capaz de ofrecer bienes y servicios al mercado, esto es, con los mismos elementos patrimoniales, infraestructuras, recursos o equipamientos disponibles por la empresa

⁶⁹ ARAGÓN GÓMEZ, Cristina, “La calidad en el empleo en el sector de la construcción: el contrato fijo de obra”, en AA.VV (MERCADER UGUINA, Jesús Rafael, Coord.): *La nueva Ley Reguladora de la Subcontratación en la Construcción*, Lex Nova, Valladolid, 2007, p. 189.

⁷⁰ Rec. 1137/2020.

⁷¹ Rec. 3645/2018.

⁷² C-550/19.

anterior) o de “*un convenio colectivo*”, tal y como sucede en el sector aquí analizado, omitiendo toda referencia a los pliegos de condiciones que fueron admitidos por decisiones judiciales laborales como instrumentos de los que podía derivar la subrogación, pero que la jurisdicción contencioso-administrativa ya había negado⁷³. No obstante, a la espera de nuevos pronunciamientos, cabe apuntar el matiz introducido recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 27 de febrero de 2020⁷⁴, que parece admitir, cambiando la doctrina precedente⁷⁵, la sucesión de plantillas sin cesión de infraestructuras en un procedimiento de contratación pública de transporte de personas en una zona rural alemana, donde una entidad económica reanuda una actividad cuyo ejercicio requiere medios de explotación importantes, imponiendo los pliegos requisitos jurídicos, medioambientales y técnicos, sin que el nuevo adjudicatario adquiera dichos medios, propiedad de la entidad económica anterior. Entiende el Tribunal en este caso que la reanudación de la actividad puede calificarse de transmisión, siempre que otras circunstancias (distintas de las infraestructuras) permitan caracterizar el mantenimiento de la identidad de la entidad económica de que se trate, como puede ser la continuidad de la mayor parte de la plantilla siguiendo la citada actividad sin interrupción. Entiende, por ende, que, en una actividad materializada, la sola sucesión de plantilla sirve para identificar el presupuesto aplicativo de la Directiva 2001/23 y, por tanto, del artículo 44 ET si es el parámetro clave para mantener la actividad, lo que deberá apreciar el órgano judicial nacional.

⁷³ STS, Cont-Admto, 18 junio 2019 (rec. 702/2016). GARCÍA BLASCO, Juan, “Transmisiones de empresas: de la protección del patrimonio jurídico de los trabajadores a los ‘umbrales’ de efectividad del Derecho del Trabajo”, en AA.VV.: *Reestructuraciones empresariales. XXXI Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, A Coruña, 27 y 28 de mayo de 2021*, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Madrid, 2021, p. 118.

⁷⁴ C-298/18.

⁷⁵ Hasta esta sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostenía que la explotación de “actividades materializadas”, intensivas en bienes de capital, una vez sean calificadas como tales, requiere cesión de tales activos en cantidad suficiente para mantener la identidad económica y aplicar la garantía de transmisión de empresa, mientras que las actividades basadas en la explotación intensiva del factor trabajo, por lo tanto desmaterializadas, podrían limitarse a la cesión de una parte significativa de la plantilla – sucesión de plantilla–, para aplicar la garantía de transmisión. STJUE de 20 de enero de 2011, asunto C-463/09, Clece. También, SSTJCE 173/96 y 247/96, de 10 de diciembre de 1998, asuntos acumulados *Sánchez Hidalgo y otros*; 127/96, 229/96 y 74/97, de 10 de diciembre de 1998, asuntos acumulados *Hernández Vidal y otros*; 172/99, de 25 de enero de 2001, asunto *Oy Liikenne Ab*; 51/00, de 24 de enero de 2002, asunto *Temco*, 340/01, de 20 de noviembre de 2003, asunto *Carlito Abler y otros* y 232 y 233/04, de 15 de diciembre de 2005, asunto *Güney-Gorres y Demir*. MIÑARRO YANINI, Margarita, “Transmisión de empresa y cláusulas ambientales en la contratación pública: el TJUE abre la puerta a la sucesión de plantilla sin cesión de infraestructuras no sostenibles. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2020, asunto C-298/18”, *Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros)*, nº 455, 2021, p. 211 y ss.

2. El artículo 130.2 LCSP establece una obligación de transparencia sobre la realidad laboral existente de cara a los eventuales licitadores en aras a asegurar una subrogación viable cuando menos por lo que respecta a los costes laborales⁷⁶, de manera que los pliegos habrán de incluir *“información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo. A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista”*⁷⁷. Es más, el contratista entrante dispondrá de una acción directa de reclamación para el caso de que los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada y, en todo caso, estará exento de responsabilidad sobre los salarios y cotizaciones impagados respecto de los trabajadores afectados por el desajuste⁷⁸.
3. El artículo 130.6 LCSP deja claro que, *“sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 ET, el pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista saliente de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. Es más, para garantizar el cobro, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios,*

⁷⁶ Sin que forme parte del precio el coste indemnizatorio del personal sobrante cuanto la actual licitación exija menos personal. Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 156/2019, de 22 de febrero (rec. 41/2019).

⁷⁷ ROQUETA BUJ, Remedios, *El empresario público. La gestión del personal laboral tras la nueva Ley de Contratos del Sector Público*, Aranzadi, Pamplona, 2018, p. 158. La enumeración que contiene el artículo 130 LCSP no excluye que se pueda incorporar otra documentación a solicitud de los licitadores. Informe 61/2019 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado e Informe 8/2019 de la Abogacía General del Estado.

⁷⁸ MOLINA HERMOSILLA, Olimpia, “Dimensión cualitativa de la contratación pública en la era covid-19”, Comares, Granada, 2021, p. 99 y ss.

procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados emolumentos, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos”⁷⁹.

Aun cuando tal previsión tiene una finalidad clara, cual es evitar el encarecimiento de costes en mano de obra por parte del contratista inicial con repercusión en el nuevo adjudicatario impidiendo concursos sin oferta⁸⁰, lo cierto es que *ex lege* se obliga a que los pliegos excepcionen la aplicación del principio de responsabilidad solidaria que el artículo 44.3 ET atribuye al cedente y al cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, durante tres años respecto de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas, incluyendo salarios impagados, las indemnizaciones por despido pendientes de abono, así como la responsabilidad que el artículo 168.2 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS) confiere a ambos igualmente frente a las cotizaciones pendientes de ingreso con los recargos correspondientes y las prestaciones causadas con anterioridad a la transmisión⁸¹.

Cabe preguntarse aquí si un pliego de condiciones tiene capacidad para modificar este régimen legal, no en vano el artículo 34 LCSP sienta que *“en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios... al ordenamiento jurídico”*, pues, como no podía ser de otra manera, resultan indisponibles para el contratista las normas de *ius cogens*, en este caso, con referencia al artículo 44 ET. Por tal motivo, en una primera aproximación, se pensó que el artículo 130.6 LCSP establecía un régimen de responsabilidad íntegra y exclusiva del contratista saliente únicamente ante un supuesto de subrogación convencional (y no legal), donde podría no haber responsabilidad solidaria del nuevo adjudicatario sino que toda la responsabilidad se atribuye al primero⁸². Esta cuestión ha sido recientemente analizada por el Tribunal

⁷⁹ ALFONSO MELLADO, Carlos, “Contratos del sector público: sucesión de contratas y reversión a la gestión pública”, *Revista de Derecho Social*, nº 82, 2018, p. 34.

⁸⁰ Cabe mencionar la Resolución 662/1998, de 6 de julio de 2018, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, anulando la previsión en un pliego de cláusulas administrativas particulares la imposición al adjudicatario de la obligación de responder de los salarios impagados por el contratista saliente a los trabajadores afectados por la subrogación y de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas. OLARTE ENCABO, Sofía, “Cláusulas convencionales sobre subrogación de plantillas: el posible escenario ante una doctrina europea garantista ya acogida por el Tribunal Supremo”, *Derecho de las Relaciones Laborales*, nº 10, 2019, p. 992.

⁸¹ ÁLVAREZ ALCOLEA, Manuel, “Responsabilidad en los supuestos de cambio en la titularidad de la empresa. En particular, en la sucesión de contratas”, en AA.VV (RIVERO LAMAS, Juan, Director): *Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El outsourcing*, Aranzadi, Pamplona, 2003, p. 270.

⁸² Con fundamento en la STS, Social, 7 abril 2016 (rec. 2269/2014).

de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 11 de julio de 2018⁸³, que versa sobre un supuesto de resolución de un contrato de vigilancia de instalaciones celebrado con una contratista y la subsiguiente formalización de un nuevo contrato con otra empresa, que se hace cargo de una parte sustancial del personal en virtud de un convenio colectivo que no establece la responsabilidad solidaria entre contratista y concesionario a la que alude el artículo 44.3 ET, llegando el Tribunal europeo a la conclusión de que se trata de una confrontación entre disposiciones normativas nacionales que se escapa de su competencia. Por su parte, el Tribunal Supremo tradicionalmente había entendido que para los supuestos de subrogación convencional “*no se aplica el régimen previsto en la ley sino el previsto en el convenio con sus requisitos y consecuencias... De esta forma, si el convenio no establece la obligación de asumir las deudas anteriores a la subrogación, la empresa cesionaria no es responsable de las mismas*”⁸⁴. Sin embargo, el Alto Tribunal, en Sentencia de 27 de septiembre de 2018⁸⁵, cambia de criterio y entiende que han de aplicarse las garantías del artículo 44.3 ET (responsabilidad solidaria derivada de la subrogación legal) a pesar de que la subrogación provenga del mandato del convenio, pues el citado precepto estatutario tiene naturaleza imperativa. Por el momento, el juego del artículo 130.6 LCSP se ha considerado, no obstante y a la espera de otros pronunciamientos, como norma especial de aplicación preferente frente al régimen de responsabilidades derivadas de la normativa laboral⁸⁶.

4. Tampoco hay que olvidar que el nuevo artículo 130.3 LCSP prevé que “*en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general*”⁸⁷. Así pues, el artículo 130.3 LCSP trata de evitar que las entidades públicas procedan a incorporar voluntariamente plantilla procedente de la empresa que cesa en el servicio sin estar obligadas a ello por una disposición legal, de modo que las Administraciones Públicas no pueden subrogarse en la posición empresarial de forma libre y voluntaria en aquellos casos en que no concurren los presupuestos aplicativos de la sucesión de

⁸³ C-60/2017.

⁸⁴ STS, Social, 10 mayo 2016 (rec. 2957/2015).

⁸⁵ Rec. 2747/2016. MONEREO PÉREZ, José Luis y ORTEGA LOZANO, Pompeyo Gabriel, “Sucesión de plantilla en la empresa por subrogación convencional –ex convenio colectivo sectorial–. La reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su recepción por el Tribunal Supremo”, *La Ley Unión Europea*, nº 65, 31 de diciembre de 2018.

⁸⁶ MORENO VIDA, María Nieves y LÓPEZ INSÚA, Belén del Mar: “La descentralización productiva a través de la subcontratación en el sector público y vicisitudes subrogatorias”, *Revista de Derecho Social*, nº 85, 2019, p. 24.

⁸⁷ Entre otras, STS, Social, 22 mayo 2000 (rec. 2892/1999).

empresa, en la medida que ello podría significar el incumplimiento de los principios de igualdad, capacidad y mérito que rigen el acceso al empleo público⁸⁸. Esta nueva previsión de la LCSP es la que había sido acogida previamente por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado⁸⁹, la Abogacía del Estado⁹⁰, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales⁹¹ y alguna sentencia del orden contencioso-administrativo⁹², surgiendo el interrogante de la cualidad en la que se produce tal incorporación, en los casos en los que efectivamente proceda, sin que la categoría de “*personal indefinido no fijo*” o de “*personal laboral subrogado a extinguir*”⁹³ sean una solución satisfactoria a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁹⁴, pues no aseguran adecuadamente el principio de estabilidad en el empleo⁹⁵.

Teniendo clara la alusión a la obligación derivada de “una norma legal”, referida, como ya consta, al artículo 44 ET⁹⁶, deviene pertinente alertar de que las cláusulas convencionales a favor del traspaso de trabajadores en el supuesto de sucesión de contratas como sucede en el sector de la construcción no pueden ser, sin embargo, de aplicación cuando la gestión del servicio revierte a la Administración u otro ente administrativo, en tanto dicha regulación convencional únicamente podría afectar a las empresas incorporadas al ámbito personal del convenio, pero nunca a empleadores en él no incluidos⁹⁷; es decir, el convenio colectivo “*ni puede contener cláusulas obligacionales que afecten a quienes no son parte en la negociación ni, en su contenido*

⁸⁸ GOERLICH PESET, José María y NORES TORRES, Enrique: “Aspectos laborales de la reversión de contratas y concesiones administrativas: el impacto de las Leyes 3/2017 y 9/2017”, *Trabajo y Derecho*, nº 42, 2018, p. 4.

⁸⁹ Informe 31/1999, de 30 de junio de 1999.

⁹⁰ Dictamen de 29 de junio de 2005.

⁹¹ Resolución 75/2013, de 14 de febrero, y 965/2015, de 23 de octubre.

⁹² SSTs, Cont-Admtivo, 8 junio 2016 (rec. 1602/2015).

⁹³ LÓPEZ CUMBRE, Lourdes, “Limitaciones a la incorporación de personal laboral en el sector público. Reglas de subrogación y empleo público”, *Revista Galega de Derecho Social*, nº 3, 2017, p. 147.

⁹⁴ SSTJUE de 13 de junio de 2019, C-317/18, asunto *Catia Correia Moreira y Municipio de Portimao*, 11 de febrero de 2021, C-760/18, asunto *Agios Nikolaos* y 3 de junio de 2021, C-726/2019, asunto *Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario*.

⁹⁵ GARCÍA BLASCO, Juan, “Transmisiones de empresas: de la protección del patrimonio jurídico de los trabajadores a los ‘umbrales’ de efectividad del Derecho del Trabajo”, en AA.VV.: *Reestructuraciones empresariales. XXXI Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, A Coruña, 27 y 28 de mayo de 2021, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Madrid, 2021, p. 133.

⁹⁶ También, Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (artículo 75.4).

⁹⁷ CASTILLO BLANCO, Federico, *La reinternalización de servicios públicos: aspectos administrativos y laborales*, Cemical, Barcelona, 2017, p. 17 y ss.

normativo, establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación”⁹⁸.

8. Conclusión

El abandono de un disfuncional y altamente contaminante modelo de construcción expansiva y la apuesta por otro centrado en la regeneración, rehabilitación y renovación de los emplazamientos de la población, sea en zonas urbanas o sea en ámbitos rurales, va a permitir incentivar la coyuntura económica, diseñar viviendas dignas y confortables, favorecer la cohesión social, satisfacer las demandas de servicios por parte de los ciudadanos, aumentar la eficiencia energética y fomentar el empleo de calidad. En este tránsito se van a crear nuevas oportunidades de ocupación dentro de un sector de la construcción “ecológica”, menos manual y más avanzado desde el punto de vista técnico, incorporando materiales menos contaminantes, adelantados sistemas bioclimáticos, fuentes de energía renovables y, cómo no, modernas herramientas, que permiten mejorar la sostenibilidad ambiental, la confortabilidad de los edificios, el equilibrio geográfico y el disfrute de unas condiciones de trabajo decentes en las actividades profesionales involucradas.

9. Bibliografía

ALFONSO MELLADO, Carlos, “Contratos del sector público: sucesión de contratas y reversión a la gestión pública”, *Revista de Derecho Social*, nº. 82, 2018.

ALONSO IBÁÑEZ, Rosario, “Marco jurídico para el urbanismo social y participativo”, en AA.VV.: *Libro homenaje al Prof. Balbé Prunes, El Derecho a la ciudad y el territorio*, INAP, Madrid, 2016.

ÁLVAREZ ALCOLEA, Manuel, "Responsabilidad en los supuestos de cambio en la titularidad de la empresa. En particular, en la sucesión de contratas", en AA.VV (RIVERO LAMAS, Juan, (Director): *Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El outsourcing*, Aranzadi, Pamplona, 2003.

ÁLVAREZ CUESTA, Henar, *Empleos verdes: una aproximación desde el Derecho del Trabajo*, Bomarzo, Albacete, 2016.

ÁLVAREZ CUESTA, Henar, *El futuro del trabajo vs el trabajo del futuro*, Colex, Madrid, 2017.

⁹⁸ SSTs, Social, 28 octubre 1996 (rec. 566/1996), 21 abril 2015 (rec. 91/2015) y 26 noviembre 2018 (rec. 2128/2016).

ÁLVAREZ CUESTA, Henar, “Transición justa y lucha contra el cambio climático en el Pacto Verde europeo y en el Proyecto de Ley de Cambio Climático en España”, *IUSLabor*, nº. 2, 2020.

ARAGÓN GÓMEZ, Cristina, “La calidad en el empleo en el sector de la construcción: el contrato fijo de obra”, en AA.VV (MERCADER UGUINA, Jesús Rafael, Coord.): *La nueva Ley Reguladora de la Subcontratación en la Construcción*, Lex Nova, Valladolid, 2007.

AYUSO RUÍZ-TOLEDO, Mariano, “El urbanismo después de la pandemia del covid-19”, *Revista de Derecho Urbanístico y medio ambiente*, nº. 337-338, 2020.

BARREDA, Esteban, “Algunas aclaraciones sobre la responsabilidad legal del Project Manager en la construcción”, *Diario La Ley*, nº. 9322, 2018.

CACHÓN RODRÍGUEZ, Lorenzo, “La formación y los nuevos yacimientos de empleo en España”, *Reis*, nº. 77-78, 1997.

CASTILLO BLANCO, Federico, *La reinternalización de servicios públicos: aspectos administrativos y laborales*, Cemical, Barcelona, 2017.

CHACARTEGUI JAVEGA, Consuelo, *Negociación colectiva y sostenibilidad medioambiental. Un compromiso social y ecológico*, Bomarzo, Albacete, 2019.

FARIÑA ROJO, José, “Ciudad sostenible, rehabilitación y regeneración urbana”, en AA.VV.: *Rehabilitación y regeneración urbana en España. Situación actual y perspectivas*, Ed. J. Tejedor Bielsa, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2013.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Roberto, “El contenido de las enseñanzas profesionales en el contrato para la formación”, *Revista de Derecho Social*, nº. 45, 2009.

FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, María de los Ángeles, “La integración ambiental en la contratación pública: el certificado de eficiencia energética de los edificios”, *Revista General de Derecho Administrativo*, nº. 49, 2018.

FORTES MARTÍN, Antonio, “La movilidad urbana sostenible como fenómeno jurídico: El derecho de la movilidad sostenible”, en AA.VV (FORTES MARTÍN, Antonio, Director): *Movilidad urbana sostenible y acción administrativa. Perspectiva social, estrategias jurídicas y políticas públicas de movilidad en el medio urbano*, Aranzadi, Pamplona, 2019.

GARATE CASTRO, Javier, "Descentralización productiva por medio de contratas de obras y servicios. Algunas cuestiones laborales y de Seguridad Social, con especial referencia a las Administraciones públicas", *Actualidad Laboral*, 2004, Tomo I.

GARCÍA BLASCO, Juan, "Transmisiones de empresas: de la protección del patrimonio jurídico de los trabajadores a los 'umbrales' de efectividad del Derecho del Trabajo", en AA.VV.: *Reestructuraciones empresariales. XXXI Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, A Coruña, 27 y 28 de mayo de 2021, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Madrid, 2021.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, "Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural", *Revista Española de Derecho Administrativo*, nº. 39, 1983.

GARCÍA LUPIOLA, Asier, "Normativa para el desarrollo sostenible: los paquetes legislativos 'economía circular' y 'energía limpia'", *Revista General de Derecho Europeo*, nº. 50, 2020.

GOERLICH PESET, José María y NORES TORRES, Enrique, "Aspectos laborales de la reversión de contratas y concesiones administrativas: el impacto de las Leyes 3/2017 y 9/2017", *Trabajo y Derecho*, nº. 42, 2018.

GÓMEZ JIMÉNEZ, María Luisa, "Vivienda domótica adaptada a la emergencia sanitaria: ideas preliminares, retos y propuestas normativas para la sociedad post covid-19", *Revista de Derecho Urbanístico y medio ambiente*, nº. 337-338.

GÓMEZ JIMÉNEZ, María Luisa, "Sostenibilidad urbana local y ciudades saludables en transición en la era covid-19: un enfoque jurídico sindémico ante el desarrollo azul", *Revista Iberoamericana de Gobierno Local*, nº. 18, 2020.

GÓMEZ-FERRER MORANT, Rafael, "Artículo 47 CE", en AA.VV (RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel, Director): *Comentarios a la Constitución Española*, BOE, Madrid, 2008.

HUMERO MARTÍN, Antonio Eduardo, "La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas: norma jurídica definitoria del contenido del artículo 47 de la Constitución Española (hacia un modelo sostenible e integrador del tejido urbano)", *Revista de la Unión Europea*, nº. 30, 2014.

LAFUENTE PASTOR, Vicente Pedro, “El contrato de obra o servicio en la construcción en el nuevo escenario de la Ley 32/2006”, en AA.VV (GARCÍA BLASCO, Juan, Director): *La subcontratación en el sector de la construcción. Análisis de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y del RD 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla*, 2ª edición, Aranzadi-Thomson Reuters, Pamplona, 2009.

LÓPEZ CUMBRE, Lourdes, “Limitaciones a la incorporación de personal laboral en el sector público. Reglas de subrogación y empleo público”, *Revista Galega de Derecho Social*, nº. 3, 2017.

LÓPEZ RAMÓN, Fernando, *Introducción al Derecho urbanístico*, Marcial Pons, Madrid, 2009.

LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, María Piedad, “El Real Decreto 1627/1997 sobre medidas de seguridad y salud en las obras de construcción”, *Información Laboral*, nº. 3, 2002.

LUJÁN ALCARAZ, José, “La seguridad y salud laboral en las obras de construcción”, *Aranzadi Social*, nº. 5, 2007.

MARTÍN CASTRO, María Belén, “Ayer y hoy de los nuevos yacimientos de empleo: aproximación desde la UE al caso español”, *Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social*, nº. 111, 2014.

MENÉNDEZ REXACH, Ángel, “El informe de evaluación de edificios en la Ley 8/2013”, *Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*, nº. 179, 2014.

MENÉNDEZ REXACH, Ángel, “Los objetivos económicos de la regulación del suelo (1956-2015)”, *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº. 311, 2017.

MERCADER UGUINA, Jesús Rafael, *Salario y crisis económica*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011.

MIÑARRO YANINI, Margarita, “Innovación tecnológica, organización del trabajo y sostenibilidad ambiental: ¿es el teletrabajo una forma de empleo verde?”, *Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros)*, nº. 454, 2021.

MIÑARRO YANINI, Margarita, “Transmisión de empresa y cláusulas ambientales en la contratación pública: el TJUE abre la puerta a la sucesión de plantilla sin cesión de infraestructuras no sostenibles. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea de 27 de febrero de 2020, asunto C-298/18)”, *Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros)*, nº. 455, 2021.

MOLINA HERMOSILLA, Olimpia, “Dimensión cualitativa de la contratación pública en la era covid-19”, Comares, Granada, 2021.

MONEREO PÉREZ, José Luis y ORTEGA LOZANO, Pompeyo Gabriel, “Sucesión de plantilla en la empresa por subrogación convencional –ex convenio colectivo sectorial--. La reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su recepción por el Tribunal Supremo”, *La Ley Unión Europea*, nº. 65, 31 de diciembre de 2018.

MORENO VIDA, María Nieves y LÓPEZ INSÚA, Belén del Mar, “La descentralización productiva a través de la subcontratación en el sector público y vicisitudes subrogatorias”, *Revista de Derecho Social*, nº. 85, 2019.

OLARTE ENCABO, Sofía, “Cláusulas convencionales sobre subrogación de plantillas: el posible escenario ante una doctrina europea garantista ya acogida por el Tribunal Supremo”, *Derecho de las Relaciones Laborales*, nº. 10, 2019.

OLMO GASCÓN, Ana María, “Tratamiento del empleo verde en la normativa internacional y europea (especialmente en el pilar europeo de derechos sociales): la precisa reconfiguración de sus elementos jurídico-laborales”, en AA.VV (MORA CABELLO DE ALBA, Laura y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, María Luz, Coords.): *El futuro del trabajo que queremos*, Bomarzo, Albacete, 2017.

PARAMIO PARAMIO, Alberto, *Problemática de la subcontratación en la construcción. Análisis jurídico y resoluciones prácticas*, Lex Nova, Valladolid, 2009.

QUINTANA LÓPEZ, Tomás, “De la conservación de las edificaciones existentes a la regeneración de la ciudad existente. Claves de la evolución”, *Revista Urbanismo y Edificación*, nº. 24, 2011.

QUINTANA LÓPEZ, Tomás, “Hacia un modelo de urbanismo sostenible”, en AA.VV (QUINTANA LÓPEZ, Tomás, Director): *Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

QUINTANA LÓPEZ, Tomás, “Presentación. Hacia un urbanismo sostenible en Castilla y León. Fundamentos jurídicos para un cambio de modelo”, *Revista Jurídica de Castilla y León*, nº. 39.

RODRIGO SANBARTOLOMÉ, Francisco Agustín, “El contrato fijo de obra. El artículo 15.5 del ET y las reformas laborales”, *Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros)*, nº. 382, 2015.

RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “Sostenibilidad ambiental y prevención de riesgos laborales: reflexiones sobre el sector de la construcción ecológica”, *Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social*, nº. 138, 2018.

RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “Sostenibilidad laboral en el sector de la construcción: la estabilidad en el empleo como premisa”, *Temas Laborales*, nº. 152, 2020.

ROQUETA BUI, Remedios, *El empresario público. La gestión del personal laboral tras la nueva Ley de Contratos del Sector Público*, Aranzadi, Pamplona, 2018.

SÁNCHEZ, Vicente, “Las implicaciones de la economía digital en el sector de la construcción”, *Gaceta Sindical*, nº. 27, 2016.

VAN-HALEN RODRÍGUEZ, Juan, “Ciudades sostenibles: un reto inaplazable”, *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº. 300, 2015.

SANTIAGO IGLESIAS, Diana, “Iniciativas para un futuro urbano sostenible: las Smart cities”, en AA.VV (QUINTANA LÓPEZ, Tomás, Director): *Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

VINUESA ANGULO, Julio y PORRAS ALFARO, David, “La dimensión territorial de la crisis de la vivienda y el despilfarro inmobiliario residencial”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, nº. 35, 2017.